

CREDITO PRESUPUESTARIO	SERVICIOS CENTRALES		SERVICIOS PERIFERICOS		CANTO DE INGRESOS	TOTAL
	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO		
CAPITULO VI CREDITOS: 64.15.421	-	-	-	-	4.978	
TOTAL CAPITULO VI...	-	-	-	-	4.978	4.978
TOTAL COSTES						24.071
RECURSOS CREDITOS: 64.15.321	-	-	-	-	-	
TOTAL RECURSOS.....	-	-	-	-	-	
CARGA ASIGNADA VERA	-	-	-	-	-	24.071

- 26 -

4136

REAL DECRETO 302/1984, de 25 de enero, por el que se autoriza la creación de la Sociedad estatal «Empresa Nacional de Autopistas, S. A.».

La situación de crisis económica por la que atraviesan los países industrializados, particularmente acusada en las actividades relacionadas directamente con la utilización de productos petrolíferos, como el tráfico automovilístico y, consiguientemente, la utilización de las redes viarias, ha producido, entre otras consecuencias, la de un replanteamiento de la política de construcción y la forma de gestión de las autopistas de peaje. Así, por ejemplo, ha sucedido en Francia y en Italia, donde las Sociedades estatales y las de economía mixta han adquirido un papel preponderante en el sector.

En España el fracaso de la política seguida en los últimos años en esta materia se presenta con perfiles graves, no sólo por razones análogas a las expuestas, sino como consecuencia de unos planteamientos erróneos, al abordarse inicialmente la construcción de estas vías, que dieron lugar a la fijación de unos objetivos inadecuados y, por lo mismo, al desarrollo parcial y poco coherente de unos planes en buena medida improvisados.

Tal estado de cosas, ha provocado la necesidad de una actuación pública, de la que es ejemplo el Real Decreto-ley 8/1983, de 23 de noviembre, dirigida a reordenar el sector y a evitar que los problemas que afectaban a algunas Sociedades concesionarias pudieran ocasionar graves perjuicios a intereses más amplios.

Sobre estas premisas, parece lógico que tal actuación pública se instrumente en este punto utilizando la técnica de la creación de una Sociedad estatal, pues con ella se logran armonizar las exigencias del interés general y la necesaria agilidad en la gestión, lo que en definitiva redundará en una mayor eficacia en el manejo de los recursos que sean asignados, sin merma del control estricto de su aplicación. Por otro lado, permitirá contar con un Ente apropiado para desarrollar y coordinar, en el aspecto gestor, la política que en cada momento determine el Gobierno en esta esfera.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de enero de 1984,

DISPONGO:

Artículo 1.º Se autoriza la creación, con el carácter de Sociedad estatal, de la Sociedad «Empresa Nacional de Autopistas, Sociedad Anónima» (en anagrama ENAUSA), cuyo capital se aportará íntegramente por el Estado.

Art. 2.º El capital de la Sociedad será, en todo momento, exclusivamente estatal y se fija inicialmente en 50.000.000 de pesetas, quedando el Ministerio de Economía y Hacienda autorizado para su suscripción, desembolso e incorporación a la Cartera del Estado de los títulos correspondientes.

El Estado podrá aportar los recursos necesarios para mantener su equilibrio financiero.

Art. 3.º Cuando la realización de las correspondientes obras así lo exija, la «Empresa Nacional de Autopistas, S. A.» podrá obtener la condición de beneficiario de la expropiación, en su caso, según lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento, de 26 de abril de 1957, correspondiendo la facultad expropiatoria al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Art. 4.º La Sociedad se regirá por las normas de Derecho Mercantil, Civil y Laboral, sin perjuicio de la aplicación en lo procedente de la Ley del Patrimonio del Estado, de la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977, y, en lo no derogado por ésta, de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 28 de diciembre de 1938.

Art. 5.º La «Empresa Nacional de Autopistas» tendrá por objeto:

1.º La construcción, por sí o por terceros, y la explotación de autopistas de peaje u otras vías, previa autorización del Gobierno.

2.º La promoción, por sí o en concurrencia con otras Entidades o Empresas públicas o con personas o Entidades privadas, de Empresas cuyo objeto sea la construcción o explotación de dichas vías.

3.º La participación en el capital de Sociedades que tengan tal objeto y realicen su actividad como concesionarias del Estado u otro Ente Público, o en virtud de otro sistema de gestión indirecta.

4.º Las demás actividades que sean complementarias o derivadas de las anteriores.

Art. 6.º La Sociedad cuya constitución se autoriza en el artículo 1.º seguirá en su actuación las directrices que en las materias relacionadas con sus fines propios establezca el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje ejercerá, en relación con la «Empresa Nacional de Autopistas», las mismas funciones que tiene atribuidas respecto de aquéllas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.—Se transferirán a la «Empresa Nacional de Autopistas», como aportación no dineraria de capital, las acciones de Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje de las que el Estado sea titular, a su valor actual.

Segunda.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 5.º de este Real Decreto, la «Empresa Nacional de Autopistas, S. A.» podrá explotar las carreteras a las que se refieren los artículos 27 al 30 de la Ley 31/1974, de 19 de diciembre, de carreteras, y sus correlativos del Reglamento General aprobado por Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero.

DISPOSICION FINAL

Por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo se dictarán las disposiciones y se adoptarán las medidas que exijan la aplicación y el desarrollo de lo dispuesto en este Real Decreto, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 25 de enero de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

4137

REAL DECRETO 303/1984, de 16 de febrero, por el que se garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales del transporte urbano de Madrid.

El servicio público de transporte urbano de Madrid no puede quedar paralizado como tal servicio público por el ejercicio del legítimo derecho de huelga de los trabajadores de dicho medio de transporte urbano, habida cuenta del grave perjuicio que ello ocasionaría a los usuarios de dichos medios de comunicación esencial para Madrid.

La prestación de servicios mínimos está garantizada por el Real Decreto 495/1960, de 14 de marzo, en cuanto al Ferrocarril Metropolitano de Madrid, pero no en lo que se refiere al transporte urbano de superficie.

Parece, por ello, evidente la necesidad de adoptar las medidas precisas para garantizar el funcionamiento de dicho servicio público, haciendo compatibles unos intereses generales con los derechos individuales de los trabajadores. El derecho de huelga